EL ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD: HACIA UNA REDACCIÓN INCLUSIVA Y CIUDADANA DE LAS SENTENCIAS

**DR. HUGO MOLINA MARTÍNEZ.
MAGISTRADO ELECTORAL**

TABLA DE CONTENIDOS

Introducción	1
Desarrollo	1
Conclusión	4

INTRODUCCIÓN.

El acceso a la justicia es un derecho fundamental consagrado en la Constitución y en diversos tratados internacionales de los cuales México forma parte. Sin embargo, convertir este derecho en una realidad efectiva para todas las personas, sigue siendo un reto.

La complejidad del lenguaje jurídico, las formalidades excesivas y la falta de enfoques incluyentes, han generado barreras que limitan el pleno ejercicio de la justicia, especialmente para los grupos en situación de vulnerabilidad.

Reconociendo está problemática, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro del acuerdo general 1/2019 del diez de abril de dos mil diecinueve, establece la importancia de emitir sentencias accesibles, y en formatos adecuados para los diversos sectores poblacionales.

(...)

Por esos motivos, hemos decidido que en los casos en que haya niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas migrantes y sujetas a protección internacional, personas, comunidades y pueblos indígenas y en todos aquellos casos en que los Ministros de esta Segunda Sala consideremos que la o las personas involucradas tienen características y condiciones sociales específicas o que se trate de casos que sean muy importantes y trascendentes para el país, **vamos a emitir además de la sentencia tradicional, una de lectura accesible y sencilla que además se dará a conocer en los medios y formatos particulares, adecuados y accesibles, que requiera la persona o grupo de personas del caso.** Y esto lo vamos a hacer aun cuando decidamos que por alguna razón no podemos resolver el fondo o conflicto en ese asunto (lo que en términos técnicos se conoce como causa de improcedencia).

(...)

En el presente ensayo, se abordará la temática de la necesidad de construir modelos de redacción de sentencias con perspectiva ciudadana y lectura fácil, con el fin de garantizar un acceso real y equitativo a la justicia, lo anterior, dando **cumplimiento** al punto 6, base TERCERA de la **Convocatoria**¹.

DESARROLLO.

¹Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se emite la convocatoria pública para ocupar el cargo de magistrada o magistrado de órgano jurisdiccional local en materia electoral.

El artículo 17 de la Carta Magna², establece dentro de sus dos primeros párrafos:

Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes preverán las cuantías y supuestos en materia tributaria en las cuales tanto los Tribunales Administrativos como las Juezas y Jueces de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación o, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberán resolver en un máximo de seis meses, contados a partir del conocimiento del asunto por parte de la autoridad competente. En caso de cumplirse con el plazo señalado y que no se haya dictado sentencia, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deberá dar aviso inmediato al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de dicha demora o, en su caso, dar vista al órgano interno de control tratándose de Tribunales Administrativos.

(Énfasis añadido)

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)³, establece dentro del artículo 25, párrafo primero, lo siguiente:

Protección Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

(Énfasis añadido)

Lo anterior, se traduce en la responsabilidad que tiene el Estado, a través de los tribunales, de garantizar que todas las personas dispongan de recursos **accesibles y efectivos** para hacer valer sus derechos políticos y civiles.

² Consultable en el enlace: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

³ Consultable en el enlace: https://www.oas.org/dil/esp/1969_Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf

En la actualidad, México transita hacia un nuevo sistema jurídico, que pretende adecuarse a las necesidades de una sociedad que se ha vuelto más compleja y mucho más diversa. Donde el “Estado de Derecho”, juega un papel crucial, en la protección de los grupos históricamente vulnerados. Así, las transformaciones políticas y sociales de los últimos años han conferido a los tribunales la responsabilidad de migrar a sistemas de justicia más rápidos, accesibles, eficaces y eficientes.

Si, un sistema de justicia que se encuentra creciendo a la par de las exigencias de una sociedad cada vez más participativa y activa, debe reconocerse el derecho de todas y todos como titulares de un derecho de acción ante los tribunales, que tienen como consecuencia que su petición sea resuelta en una sentencia, fundada y motivada; en la que deben explicarse las razones del porqué, el recurrente, es asistido -o no-, por la razón.

El acceso a la impartición de justicia debe considerarse como un elemento fundamental de la igualdad, pero no de una igualdad formal, en el sentido de la abolición de las distinciones y privilegios jurídicos de origen étnico, nacional, edad, discapacidades, condición social, religión, opiniones, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana⁴, sino en el sentido de **hacer efectiva tal igualdad, por lo menos en cuanto igualdad de oportunidades.**

Por lo anterior, es de suma relevancia, que **las sentencias, al constituir el medio de comunicación más importante entre los órganos de impartición de justicia, y los justiciables**, se convierten en un punto clave, y en el culmen de la legitimidad y rendición de cuenta de los órganos jurisdiccionales, dotadas de los principios que revisten los proceso jurisdiccionales, sean accesibles para todas las personas que solicitan la tutela efectiva de sus derechos.

La lucha de grupos históricamente vulnerados ha traído cambios profundos en la manera de como los tribunales y los juzgadores, hemos entendido la igualdad, la participación en la vida pública, el acceso a la justicia y la impartición de la misma.

En la actualidad nuestro sistema jurídico y nuestra democracia, enfrenta exigencias cada vez mayores y más demandantes; los tiempos en los que la justicia era exclusivamente para sectores privilegiados o para quienes poseen conocimientos técnicos, deben quedar atrás.

Así, la tarea de las y los juzgadores, es brindar la cercanía que los justiciables merecen y que la sociedad tanto necesita, para poder recuperar la confianza en la impartición de justicia.

⁴ Artículo 1º, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

Pues, el exceso de las formalidades y tecnicismos que suelen revestir los procesos jurisdiccionales termina por traducirse en barreras sociales e institucionales que siguen enfrentando las y los mexicanos para ejercer plenamente sus derechos.

CONCLUSIÓN.

Velar por los derechos político-electorales de los diversos grupos poblacionales, va mucho más allá de garantizar “*su derecho a votar y a ser votados*”, también y como mínimo, es necesario garantizar el acceso a los diversos recursos aplicables, ¿cómo una persona indígena va a apelar, impugnar o a recurrir una sentencia si ni si quiera sabe de qué trata? Porque quizás, la sentencia no fue interpretada a su lengua.

¿Cómo una persona con discapacidad visual tendría acceso a la justicia si las resoluciones o actuaciones no se encuentran en un material que la persona pueda leer o conocer? De ahí surge la innegable necesidad de adecuar el sistema a la realidad.

Un fallo que no se entiende, hace poco por la persona que busca proteger. En nuestra labor, la forma constituye fondo, y que las sentencias no pudieran ser entendidas ni alcanzadas por las minorías, sugiere que el sistema estaba diseñado por las mayorías.

En este punto, es dable precisar, que atendiendo a como avanza nuestra sociedad y nuestro sistema, más allá de las sentencias de fácil lectura, deberá hablarse también de los acuerdos o resoluciones de trámite accesibles, y de fácil lectura, para iniciar a entretejer actuaciones armonizadas con el fallo.

Derribar las barreras y acortar las brechas, es contribuir a un sistema de justicia cercano a todas y todos, ahí deviene la importancia de entender las sentencias con perspectiva ciudadana y lectura fácil, como una herramienta que contribuye al fortalecimiento de nuestras instituciones, de nuestra democracia y de nuestro sistema de justicia.

La construcción de sentencias ciudadanas y de fácil lectura; son una oportunidad y una herramienta de la que hoy podemos hacer uso los juzgadores, para contribuir en la construcción de **una igualdad más real y sustantiva**.